

///ta, 15 de agosto de 2011.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

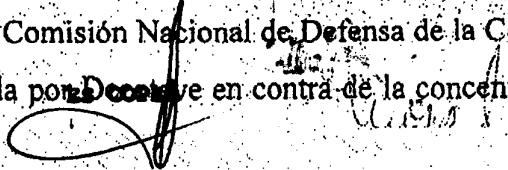
I.- Que la presente causa fue remitida a este Tribunal en virtud de que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal se declaró incompetente para entender en estas actuaciones y atribuyó su conocimiento a esta Cámara Federal de Salta (resolución del 17 de noviembre de 2009, fs. 460/461).

Para resolver de esa manera aquel Tribunal, compartiendo el dictamen fiscal de fs. 457/458, tuvo en cuenta que de las manifestaciones vertidas por la parte actora, los efectos de la concentración económica que aquí se impugna se producen en el territorio de la provincia de Salta.

Con ese criterio estimó, siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos: 330:1610, que en las materias regladas por la ley 25.156, para determinar la competencia territorial debe atenderse al mercado y comunidad presuntamente afectados por la conducta anticompetitiva imputada, aún cuando la operación de concentración notificada tenga efectos en todo el país, pues el interés de la actora se circunscribe al mercado donde desarrolla su actividad como cable-operador, sin que modifique el citado criterio el hecho de que el acto impugnado haya sido dictado en la ciudad de Buenos Aires, pues ese es el lugar donde funciona la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

II.- Que para resolver la cuestión planteada, debe tenerse en cuenta que esta Cámara ya se declaró incompetente para entender en la queja por retardo de justicia que había interpuesto la firma Decoteve por la demora de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en resolver su impugnación en contra de la operatoria de Concentración 0596 entre el Grupo Clarín S.A. y Fintech (confr. resolución de fecha 1 de julio de 2008, fs. 135/136).

Que si bien ahora la vía recursiva judicial se vincula con los rechazos por parte de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de la impugnación articulada por Decoteve en contra de la concentración y la



USO OFICIAL

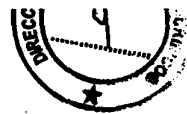
★

denuncia de incumplimiento del "compromiso irrevocable de conducta" a que se habían comprometido las partes, la incompetencia territorial de la justicia federal de Salta debe mantenerse.

Es que, a diferencia de lo expresado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, la cuestión planteada por Decoteve no se vincula con una conducta anticompetitiva que al cte puntualmente al mercado de la provincia de Salta.

Lo expuesto surge de los escritos presentados ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para impugnar el dictamen N° 637 favorable a la concentración (confr. fs. 3/25) y la Resolución N° 257/2007 de la Secretaría de Comercio Interior que aprobó la operación de concentración (fs. 26/31), en los que la firma Decoteve fundamenta su oposición a dicho procedimiento entre el Grupo Clarín S.A. y Fintech Advisory Inc. en lo dispuesto por el art. 15, *in fine* del Anexo I del Decreto N° 89/2001, reglamentario de la ley 25.156, considerando que el Dictamen N° 637 y la posterior Resolución N° 257/2007, "...fueron emitidos sin ponderar la totalidad de la información disponible, que de haber sido considerada no permite la aprobación de la operación de concentración notificada..." (confr. especialmente fs. 3, 15 y 28), por lo que los actos administrativos citados se encuentran "...viciados en su causa y, por lo tanto, susceptibles de ser revisados y dejados sin efecto por las mismas autoridades que lo emitieron..." (confr. fs. 28).

Quiere decir, pues, que las impugnaciones se dirigen contra la sustancia misma de los actos administrativos -al considerar el recurrente que fueron emitidos con fundamento en información incompleta- y no por los efectos particulares que ellos pudieran producir puntualmente en la jurisdicción donde Decoteve actúa como cable operador, razón por la que tampoco resulta de aplicación el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el mencionado pronunciamiento de Fallos: 330: 610, en el que lo que se debatía era la conducta seguida por las partes en virtud de un acuerdo al que habían arribado Cablevisión S.A. y Multicable S.A. para dividirse el mercado de televisión por cable de la ciudad de Santa Fe, por lo que era el interés económico de ese mercado geográfico y el resguardo de los derechos de los miembros de esa comunidad los que se veían perjudicados por



la conducta que se les reprochaba a las empresas denunciadas, lo que, se reitera, no ocurre en el caso, donde, los hechos denunciados por el actor, de verificarse realmente, traerían como consecuencia la nulidad de la concentración en sí misma y no la sanción de las empresas en virtud de una conducta anticompetitiva que afecte a una jurisdicción en particular.

En razón de lo precedentemente expuesto, y manteniendo este Tribunal su incompetencia, la cuestión debe ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de conformidad con lo dispuesto por el art. 24 inc. 7º del Decreto 1285/58, a donde se deberán elevar las presentes actuaciones: **ASI SE DECIDE.**

REGISTRESE, notifíquese a las partes y a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y remítase la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante oficio de estilo.

mids

USO OFICIAL

ROBERTO M. LUJÁN ROMERO
JUEZ DE CALIFICACIÓN

JUAN V. LÓPEZ
JUEZ DE CALIFICACIÓN

Ante mí:

MARÍA INÉS DE SIMANCAS
SECRETARÍA

365
105 VI
Do. De Simancas

ES COPIA